

Mesa de debate “La calidad bajo fuego”

PANELISTAS: **Carlos Giraldo**, encargado de la cobertura del conflicto armado en Colombia, diario *El Colombiano* (Medellín); **Jorge Elías**, columnista del diario *La Nación* e investigador de la *Sociedad Interamericana de Prensa*; y **Pablo Biffi**, editor de la sección Mundo del diario *Clarín*.

MODERADOR: **Elio Brat**, corresponsal de *Página/12* en Neuquén y conductor de radio.

Elio Brat

A los que han visto la película *Reed*, en realidad John Reed, no era Warren Beaty. John Reed, entre otras cosas, acompañó a Pancho Villa en sus ataques por el norte de México, convivió con los soldados, conoció a Venustiano Carranza, presidente de ese país. Todas las notas que escribió sobre la Revolución Mexicana las recogió en un libro titulado *México insurgente*. Cubriendo la Primera Guerra Mundial, Reed llegó a Rusia, que estaba en plena efervescencia revolucionaria, conoció a Lenin, estuvo presente en la capital –hoy San Petersburgo– durante las jornadas de octubre y noviembre del '17, en las que tuvo lugar el II congreso de los Soviets, de los obreros, soldados y campesinos de toda Rusia y en las semanas posteriores en que el congreso liderado por el Partido Socialdemócrata, el Partido Bolchevique acordó la toma del poder bajo el programa básico de conseguir una paz justa, el control de los obreros en la industria y la reforma en el campo. Noventa años después, conviene recordarlo y también recordar su libro *Diez días que estremecieron al mundo*. Reed murió 72 horas antes de cumplir 33 años. Era un pibe. Al otro lado del mundo, honrado por las banderas de una nación que no era la suya, fue testigo de dos de las primeras revoluciones del siglo y su obra explicó a la humanidad los significados más profundos de esos eventos.

Hablando de homenajes, Jonathan Field es subdirector –o era– de la redacción del periódico *The Guardian*. Tuvo una larga trayectoria como corresponsal de Guerra en Angola, en Afganistán, en El Salvador, en Nicaragua, en Kosovo. El dijo, entre otras cosas: “Mi trabajo como corresponsal de guerra gráfico me ha ayudado a conocer los acontecimientos de un modo bastante diferente respecto al de los reporteros de televisión. A veces incluso de un modo opuesto al de ellos”. Y también dijo: “La cámara no miente, pero distorsiona y simplifica”. Algo para pensar...

El 26 de abril de 1937, entre los cascotes de la bombardeada ciudad de Guernica, periodistas de todo el mundo rivalizaban por dar la noticia. Pero sólo uno, George Steer, esperó un día más. Volvió a la ciudad de Guernica demolida y su crónica fue la más polémica de la Guerra Civil Española. Fue primera plana del *New York Times*, conmocionó a la opinión pública mundial al revelar la participación secreta del nazismo

en el devastador ataque aéreo de la ciudad. Sirvió de inspiración a Pablo Picasso para su famosa obra y le valió a Steer un puesto en la lista negra de la Gestapo. Steer murió prematuramente a los 35 años en la India, el día de Navidad de 1944.

Pongan atención a estos datos: los cinco países con mayor número de periodistas asesinados son: Filipinas, Irak, Colombia, Bangladesh y Rusia. El total de periodistas asesinados en todo el mundo desde el primero de enero 2000 fue de 121 trabajadores. Total de periodistas caídos en el cumplimiento de la profesión: 190; porcentaje de muertos que corresponde a los asesinatos: 64; total de asesinatos en los cinco países con mayor número de periodistas asesinados: 28; porcentaje de asesinatos que ocurrieron en los cinco países citados: 48; porcentaje del total de asesinatos en el mundo resueltos: 14; total de asesinatos resueltos en los cinco países citados: 0, ninguno.

Sin ellos, sin todos ellos, los periodistas corresponsales de guerra, el horror no podría ser jamás juzgado. No es tarea fácil convertirse en los ojos y las voces de los que no pueden hablar, contar sus historias en imágenes y palabras con el riesgo de perder su propia vida.

Para ellos, todo nuestro reconocimiento.

Carlos Giraldo*

La verdad flota en un río de sangre y mentiras

La historia colombiana reciente, por lo menos la que me ha tocado vivir en el ejercicio del periodismo, es un caudal de sangre y mentiras. Les voy a contar por qué. También les voy a compartir qué he tratado de hacer, de la mano de numerosos y valientes colegas, para no naufragar allí.

Hace 10 años y un mes, exactamente, el jefe paramilitar Carlos Castaño (que fue asesinado tiempo después) llamó a la redacción del diario y solicitó airado que le pusieran en la bocina al periodista que había redactado una crónica en la que se describía cómo un comando de su organización, las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), había incendiado un caserío perdido entre los picos de las montañas del norte del departamento (provincia) de Antioquia, a diez horas de viaje desde Medellín: tres en automóvil, luego una en un bote de madera destartalado y luego seis horas a lomo de mula.

Castaño rabiaba y su incontinencia verbal se tornaba amenazante. Aunque yo no había estado en El Aro, como se llama aquel pueblito de 1.200 habitantes, pasé al teléfono. Sin tregua, dijo que éramos unos mentirosos que, para colmo de calumnias según él, habíamos escrito que sus hombres amarraron de un árbol al tendero del pueblo y lo torturaron y, estando vivo, le sacaron el corazón y las vísceras.

Al día siguiente publicamos “una versión de la versión” que Castaño dio sobre aquella incursión paramilitar. Era parte del cumplimiento del manual mínimo de ética que nos

* En el congreso el autor leyó una versión abreviada de su ponencia.

enseña que "no hay una sola versión de un hecho" y que, aunque tengamos suficientes pruebas para saber que un delincuente es un delincuente, sus verdades a medias o acomodadas, o incluso ciertas, hacen parte del cuerpo total de la verdad sobre un hecho.

En los años siguientes, antes de ser asesinado por sus propios lugartenientes en abril de 2004, Castaño repitió sus intimidaciones e hizo un par de llamadas más para negar otros hechos atroces que les atribuían a sus hombres las víctimas de las matanzas y los organismos defensores de derechos humanos.

Pero Castaño no era el único actor de aquella guerra nuestra que se mostraba delirante y molesto cuando se le atribuía un crimen o cuando se le planteaban tesis que reñían con sus intereses militares, políticos o económicos o que punzaban su ego de máximo comandante de un grupo armado ilegal.

Cuando recién comenzaba a hacer periodismo, a principios de los años noventa, recuerdo que un general de la república entró en cólera luego de que una colega, desprevenidamente, le preguntó en una rueda de prensa qué pensaba sobre el conflicto armado que sacudía al país. El uniformado la sentenció: "Señorita, aquí no hay ningún conflicto ni guerra. Se trata de algunas perturbaciones de orden público provocadas por bandas de facinerosos".

Cinco años después de aquel "juagadón" del general a mi colega, yo recibí una diatriba muy parecida. Había viajado a una región entonces desconocida por el 80% de los colombianos: el Caguán, que luego se haría célebre y sería recordada por los diálogos de paz que fracasaron allí entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. En aquel entonces, 1996, las FARC tenían en su poder a un piquete de soldados que habían convertido en "sus prisioneros" tras el asalto a la base militar de Las Delicias, al sur del país.

En mi recorrido por el río Caguán rumbo a Remolinos, una población repleta de zancudos y matorrales de coca (el caserío tenía una pequeña emisora de radio que se llamaba Hojas del Corazón), había visto viajar desprevenido y sentado sobre bultos de billetes, en un bote con motor fuera de borda, a un sacerdote italiano. Era la plata que el lancharo les llevaba a los compradores de hoja de coca, en aquella región controlada por la guerrilla. Días después entró el Ejército y el dinero en efectivo escaseaba. Los campesinos con que bajé en el bote de regreso pagaban sus pasajes con gramos de pasta de coca que cargaban atados a la cintura, envueltos en bolsitas de tela y papel de aluminio.

Con el ánimo de aclarar mis dudas periodísticas y de conocer la versión de la guerrilla sobre esa economía cocalera, aproveché una entrevista con un mando medio de las FARC en la región. Su respuesta resultó tan cortante como las versiones de Castaño y del general: "Esas son mentiras. Aquí las FARC tienen prohibida la siembra de coca".

Ya comenzarán ustedes a imaginar lo contrariado que puede sentirse un periodista en medio de esas fuentes y versiones de la realidad colombiana y de lo urgente que le resulta tratar de ver cómo hace un trabajo que desentrañe las razones y las explicaciones del conflicto, un trabajo que además sirva para aclarar los hechos que arrastra el remolino de una confrontación armada tan rabiosa como llena de trampas.

Salir del esquema judicial

Lo primero que debimos aprender los periodistas que cubrimos la guerra interna colombiana los últimos 15 años fue a “desjudicializar la información”. Con eso quiero decir que a medida que el conflicto armado se hizo más complejo, más intenso y más lleno de tramas, descubrimos, poco a poco, que el esquema y el estilo del periodismo judicial se agotaban.

Casi todos estábamos acostumbrados a emplear un lenguaje filtrado por los términos de los mandos militares oficiales y de los investigadores judiciales (fiscales e inspectores). A eso se agregaba que el estilo periodístico estaba muy emparentado con aquel de los sabuesos que investigan los crímenes de los delincuentes comunes.

El entrenamiento y la experiencia adquirida haciendo notas judiciales era útil, pero resultaba insuficiente frente a la masa de delitos del conflicto armado, hecha con recetas que incorporaban ingredientes políticos, económicos y militares apenas propios de una confrontación detonada, en su etapa más contemporánea (mediados del siglo XX), por intolerancias políticas, disputas partidistas, luchas de clase y diferencias radicales frente al modelo económico urbano y rural del país.

Ese desajuste entre un modelo periodístico que aplicaba para la criminalidad corriente y los estándares profesionales que exigía explicar y descifrar un conflicto con un largo recorrido histórico, con matices económicos, políticos y sociales, se reflejaba en el manejo mismo de las notas dentro de la estructura de los diarios. Un ataque guerrillero podía aparecer publicado en las páginas del periódico al lado de una crónica sobre un suicidio de una señora atormentada por las deudas hipotecarias. O un crimen de un opositor político se disputaba la apertura de la página judicial con “los robos cinematográficos” de las bandas de asaltantes bancarios.

La información sobre el conflicto armado tenía un registro, además de caótico, carente de jerarquías y contextos. Aunque la mayor parte de las informaciones aparecía en la página judicial, otra parte también saltaba a la sección regional, a la nacional y a veces a la página política. Por eso, a medida que el conflicto crecía y sus efectos se notaban más en la vida nacional; a medida que la guerra interna atravesaba el mapa y la realidad colombiana y se convertía en su meridiano, no quedó otra opción que cualificar el lenguaje, el relato y la presentación de los temas derivados del conflicto interno. Se impuso la necesidad de sacar la redacción de los textos de aquel marco estrecho del reporterismo judicial y abrirlo incluso a otras materias como el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Unidades de paz

A finales de la década de los noventa, se abrieron paso en los tres principales diarios del país (*El Tiempo*, *El Espectador* y *El Colombiano*) las llamadas “unidades de paz”. Eran equipos de periodistas experimentados, algunos trajinados en la reportería judicial, que vivieron un intenso proceso de capacitación en materias como historia colombiana, ciencia política, DIH y otros asuntos relacionados con el lenguaje y la realidad de las guerras internas.

Esas unidades funcionaron de manera autónoma frente a las demás áreas de los periódicos y desarrollaron un tratamiento mucho más ponderado y contextualizado de los sucesos de la confrontación entre Estado, “paraestado” y “contraestado”. A ello agregaron el registro de las noticias que tenían que ver no sólo con las acciones militares y políticas de los grupos enfrentados sino también las voces de las víctimas y de los movimientos civiles por los derechos humanos y la paz.

Esta mano de obra mejor calificada para construir la verdad de la guerra interna, su análisis y su comprensión, ayudó a superar paulatinamente el uso exclusivo de fuentes oficiales y dominantes (legales e ilegales) y ayudó a informar y entender mejor la confrontación. También incorporó al discurso informativo sobre la guerra y la paz en el país más y mejores elementos de cobertura periodística.

Contra la amnesia

La etapa más reciente de las redacciones de los periódicos, frente al manejo de los temas relacionados con el conflicto social y político, ha estado dirigida al refinamiento de los mecanismos de investigación y edición de las notas, en cuanto a su sustento documental y a su calidad narrativa (ejemplos: serie periodística “En las riberas del llanto”, de *El Colombiano*, y el especial “Colombia busca a sus muertos”, de *El Tiempo*).

Su énfasis se siente en dos elementos determinantes frente al proceso de guerra y paz colombiano: la memoria y la verdad. Factores relacionados con los procesos de Justicia que se desprenden de la acción judicial y militar del Estado contra los responsables de crímenes como el secuestro (llegaron a ser 3.572 secuestrados en 2000, según la Fundación País Libre), el desplazamiento (3 millones de personas desterradas en los últimos 25 años, según Codhes y la Iglesia Católica) y la desaparición forzada (30 mil desaparecidos reportados, para 2007, ante la Fiscalía General de la Nación).

A propósito del juzgamiento de los jefes y combatientes de los grupos paramilitares que negociaron su sometimiento a la justicia con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y que hoy rinden sus versiones libres sobre los delitos que cometieron, la prensa se plantea el reto de ver cómo participa en la reconstrucción de la verdad y de la memoria histórica.

Hay identidad en torno a dos asuntos centrales: entender que la primera obligación del periodismo es la verdad. Así lo señala el Proyecto por la Excelencia del Periodismo de la Universidad de Columbia: “La democracia depende de ciudadanos que conozcan hechos fundados y ciertos, puestos en su propio contexto”. El otro asunto se refiere a la búsqueda de un relato del conflicto armado colombiano que incorpore elementos de estética narrativa, para que la relación de los hechos de algo tan perturbador y transformador de la presente y futura sociedad colombiana no resulte un gesto mecánico; es la búsqueda para que la reconstrucción y la recreación de un drama tan intenso no se agote en sumatorias de muertos y fosas comunes ni en la presentación fragmentaria de los hechos.

Al respecto, el escritor colombiano William Ospina nos recuerda a los periodistas la necesidad de “que todo ejercicio de investigación y comunicación incluya la búsqueda de la elocuencia, la búsqueda de la belleza, y un rigor responsable de sus datos y de sus conclusiones”.

A tal interés parecen responder hoy algunas series y especiales periodísticos publicados en los diarios y revistas del país sobre aspectos y pasajes del conflicto armado. Son una mezcla que sirve para disolver las mentiras instaladas o impuestas por los actores de la guerra y que permite hallar los rastros de la sangre de cientos de miles de víctimas antes ignoradas o minimizadas en los relatos periodísticos.

A propósito de lo que se ha venido diciendo en este congreso, se trata de la tendencia cada vez más arraigada en el periodismo contemporáneo de hallar una fórmula de equilibrio e integración entre ética y estética.

Los sucesos del conflicto armado colombiano no resultan precisamente bellos en cuanto a la destrucción de la persona y la dignidad humanas que suponen, pero, finalmente, entendidos y explicados en su contexto, y narrados con el mayor interés estético de recrear el país que hemos vivido en suerte, nos permitirán superar las equivocaciones e intolerancias históricas que nos han convertido en una sociedad antagónica y sin perspectivas de solución pacífica a nuestros conflictos.

Los mentirosos

Hace dos años, en noviembre de 2005, cuando decidí remontar el camino pedregoso y de bestias que lleva al caserío de El Aro, donde los hombres de Carlos Castaño incursionaron en 1997, me tropecé con una maestra de escuela rural que se llamaba Patricia Areiza y que enseñaba allí. Era la hija de don Marco Aurelio Areiza, el tendero al que los paramilitares torturaron con una crueldad inimaginable.

Ella y sus hermanas me proporcionaron los dictámenes forenses de evaluación del cadáver de su padre y me relataron sus padecimientos. La tortura de aquel anciano de 64 años había sido mucho peor y más cierta de lo que se dijo la primera vez en que Castaño se molestó por las denuncias de la prensa.

Camino al aro de montañas que rodeaban aquel pueblito, descubrí cientos de hectáreas de cultivos de coca que controlaba una escuadra de guerrilleros de las FARC, al mando de un comandante que se me presentó como “el contador”. En efecto, él controlaba con mano de hierro la siembra, la compra y la venta de la pasta de coca y me lo dijo sin ningún recato: “El campesino que no nos paga el impuesto no puede cultivar coca”.

Pero lo que acabó de llenarme de razones para seguir investigando los hechos del conflicto armado colombiano, sus verdades y sus mentiras, fueron las palabras de la profesora Areiza, quien debió ponerse en la tarea de lograr que los niños de El Aro dejaran de dibujar el helicóptero militar que, según el juez de la república que falló el caso, apoyó la incursión de los paramilitares de Castaño.

Una frase de la maestra Areiza al jefe de un piquete paramilitar que reocupó el caserío un par de semanas antes de que yo fuera, en 2005, me transmitió mucho ánimo y coraje. El combatiente la abordó y le preguntó por qué razón ella era tan callada y distante con “nosotros los ‘paras’, que ayudamos a los campesinos”. Ella, recordando el sufrimiento de su padre, sólo atinó a responderle al paramilitar: “Si ustedes no tienen vergüenza, nosotros sí tenemos memoria”. Una memoria que debemos recobrar los

periodistas, para que otros personajes como Castaño no crean que con llamarnos "mentirosos" logran su cometido de intimidación y de ocultamiento de la verdad.

Jorge Elías

Es importante aclarar, después de haber escuchado a Carlos, que, curiosamente, la mayoría de los asesinatos de periodistas en Colombia no es consecuencia de la guerrilla ni de los paramilitares, sino de la corrupción política. En los últimos años, los periodistas latinoamericanos hemos asistido a cursos que eran prácticamente inimaginables. Esos cursos, como los dictados en la base militar de Norfolk, cerca de Washington, y aquí mismo, en Campo de Mayo, son los mismos que se imparten a los contratistas que van a Irak, Afganistán y otros escenarios hostiles. En Norfolk están a cargo de la compañía Centurion, integrada por ex marines británicos; en Campo de Mayo, por militares argentinos. Esto habla de la degradación a la que se ha llegado en el continente por la impunidad en los crímenes de periodistas. Las cifras, como comentó Elio, son abrumadoras. En menos de diez años, más de 300 periodistas fueron asesinados. El asunto es ver qué hicimos nosotros mismos y qué podemos hacer para evitar estas tragedias, terribles no sólo para las víctimas, sino, también, para las familias, los compañeros de trabajo, los medios de comunicación y la sociedad en general. Terribles para la democracia, en definitiva. Hace ocho años, la Sociedad Interamericana de Prensa convocó a una periodista de México, otra de Colombia, otra de Brasil y a mí, de la Argentina con competencia en el Cono Sur, para lanzar la Unidad de Respuesta Rápida. Nos ocupamos de la investigación de los crímenes de periodistas en la región con la coordinación, desde Miami, del director de Libertad de Prensa de la SIP, Ricardo Trotti. Si concluimos que la causa de esos crímenes ha sido el trabajo, es necesario exigir a los Gobiernos que sean esclarecidos y que no quede ningún viso de impunidad. Si los Gobiernos no responden, el próximo paso será apelar a la *Comisión Interamericana de Derechos Humanos* (CIDH), dependiente de la *Organización de Estados Americanos* (OEA). Es un trabajo silencioso y paciente. En estos ocho años, de grandes cambios políticos en América latina, hemos advertido que los Gobiernos se han mostrado cada vez más renuentes a responder las peticiones. Es, en algunos casos, como si fueran cada vez más insensibles ante desgracias ocurridas en sus territorios que los Estados, más allá de los presidentes de turno, tienen la obligación de esclarecer a sus propios ciudadanos.

Demasiado y tarde son las palabras más tristes del idioma. Demasiado tarde, Alberto Palma Godoy, alias "Tito", decidió partir con su mujer y sus hijos a Chile, su país natal. Le había enviado una nota al presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. Le advertía: "Lamentablemente, no se puede contra la mafia". No obtuvo respuesta. A la mafia se había referido dos días antes de su muerte. El último contacto al aire con el periodista Víctor Benítez, de radio *Chaco Boreal*, de Asunción, de la cual era corresponsal en el departamento de Itapúa, terminó siendo la síntesis de las amenazas que había recibido en mensajes de texto enviados a su teléfono móvil: "Me contrataron para matar" para "hacerte viajar –decía uno de ellos, con errores ortográficos–. Muy pronto n veremos". La cita iba

a ser el miércoles 22 de agosto, a eso de las 10 de la noche, en el pueblo Mayor Julio D. Otaño, sobre el río Paraná, 450 kilómetros al sudeste de la capital paraguaya. Dos hombres con uniformes militares que iban en motos irrumpieron de pronto en su vivienda. Lo acribillaron. En el piso quedaron 18 casquillos de balas, según el comisario Ángel Barboza, jefe de la Policía de Itapúa. Seis balazos dieron en la frente, el cuello, los brazos y las piernas de Palma, de 48 años. Su pareja, Wilma Martínez, de 24 años, con la cual tenía un hijo de apenas 2 meses, resultó herida en la pierna izquierda; debió ser internada de urgencia. Habían cenado con el padre de ella, Aparicio Martínez, de 59 años; en ese momento, tocaba la guitarra. “Llegaron dos personas de sexo masculino, con uniforme militar” que, “sin mediar palabras, comenzaron a efectuar disparos contra la humanidad de las víctimas”, declaró ante la Policía.

Lo había presagiado Palma en su diálogo radial con Benítez:

–En concreto, te digo que se llegó al límite máximo acá y mi señora está allá, en Ciudad del Este. Les saqué a mis hijos del colegio. Hice la denuncia de la gente vinculada con la mafia, el robo de gasoil y es difícil luchar solo.

–O sea, te vas a volver a Perú.

–No, me voy a Chile de vuelta.

–Chile, perdón.

–Lamentablemente no se puede aquí luchar contra la mafia –dijo Palma–. Los liberales son los que están manejando dos radios truchas y yo los he denunciado, y he tenido los problemas que tengo. Por eso ya no estoy en Otaño; estoy en otro lugar, esperando plata de mi familia. Me voy desilusionado. No me atrevo a ir a la Policía porque ellos los manejan a platazo (dinero) limpio.

A los ojos del fiscal, Nelson Ramos, el asesinato de Palma tuvo los visos de un ajuste de cuentas. “Estamos en presencia de algún grupo de poder –concluyó–; de dónde proviene es lo que tenemos que saber. Esto aclararía más las cosas”. Sobre dos hipótesis comenzó a trabajar Ramos: el narcotráfico (tras la muerte de una mujer en la que estuvo implicado un policía, Palma ofició de testigo en la causa que también investiga Ramos), y las denuncias contra estaciones de radio aparentemente ilegales que, al parecer, pertenecen a dirigentes liberales vinculados con el contrabando de gasoil.

Palma tenía su propia radio, pero, “por cuestiones políticas”, no pudo renovar la licencia. En diciembre de 2006, por presiones, perdió los equipos. De ahí su trabajo de corresponsal de radio *Chaco Boreal*. A los medios gráficos no vacilaban en brindarles información. En los últimos meses, sin fuente de ingresos, se ganaba la vida como fotógrafo de acontecimientos sociales y familiares. En uno de los mensajes de texto que recibió antes de morir, enviado desde el teléfono móvil número 0982-316-472, el presunto asesino dice que Palma y otro vecino de Mayor Otaño, Julio Ríos, fueron los responsables de la intervención de esas emisoras.

La conmoción caló hondo en un país tristemente familiarizado con los asesinatos de periodistas radiales que denunciaron corrupción, contrabando y relaciones del narcotráfico con políticos y empresarios. En todos los casos, las investigaciones condujeron a la impunidad. En todos los casos y en uno, en particular, que, cual llamado de atención, demostró el peligro que significa en Paraguay meter las narices donde no se debe y, como

dejó dicho Palma, donde "no se puede". Es el asesinato de Santiago Leguizamón, director de ZP 31 radio *Mburucuyá*, creada y dirigida por él en Pedro Juan Caballero, la frontera seca con Brasil, el 26 de abril de 1991, Día del Periodista. Lo liquidaron sicarios, como pudo haberle sucedido a Palma, después de haber denunciado el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el contrabando de soja, el robo de vehículos y la corrupción en general. En Paraguay, también fueron asesinados por organizaciones delictivas los periodistas Calixto Mendoza, Salvador Medina y Samuel Román.

Palma había denunciado a funcionarios municipales de Mayor Otaño, de extracción liberal, presuntamente relacionados con seccionales (dirigentes) colorados, en el contrabando de gasoil. Lo dijo en última intervención radial: "Acá, los liberales (de oposición) están en la Municipalidad y son los más grandes contrabandistas de gasoil, y el presidente de seccional (del Partido Colorado, gobernante) tiene el surtidor (estación de servicio) más grande". En alguna ocasión había dicho, también: "Yo soy una sombra negra para ellos". En marzo de 2004, la Dirección General de Migraciones de Paraguay decidió expulsarlo del país. La resolución 62, del 2 de ese mes, decía que había transgredido la ley migratoria en sus artículos 80 y 81. Era director de la FM *Mayor Otaño* y, como chileno, no tenía los documentos en regla. El trasfondo, según el diario *ABC Color*, de Asunción, era la molestia de políticos de Mayor Otaño que habrían presionado a las autoridades por las críticas frecuentes que recibían.

Sin ánimo de robarles más tiempo, sólo quiero compartir una premisa: la red creada por Fopea no es sólo una vía de comunicación, sino, también, un seguro de vida. Esa red significa que, ante la amenaza o el peligro, cualquiera de nosotros puede compartirla con los otros. Más de 200 voluntades estarán a la orden para contener a quien pasa el mal rato. Sepámosla aprovechar, de modo de no permitir que el miedo nos conduzca al peor estadio del periodismo: la autocensura. Ese periodista amenazado o en peligro, que tiene a sus familiares, amigos y compañeros en vilo, debe sentirse acompañado, contenido. No esperemos ese gesto de nadie más que de nosotros mismos. Somos los únicos capaces de calzar sus zapatos y ponernos en su lugar. Muchas gracias.

Pablo Biffi

Cuando me convocaron para participar de esta mesa, me dijeron que tenía que hablar de la calidad periodística en condiciones de riesgo. Al conocer la consigna, dudé. ¿Por qué debería haber algo distinto en cuanto a la calidad si es en condiciones de riesgo o bajo fuego? Creo que los estándares para medir la calidad de un trabajo periodístico no tienen que ver con la circunstancia en la que uno lo haga sino con lo que uno cree acerca de lo que debe ser nuestra profesión, sea bajo fuego o sea tranquilamente en la redacción, o sea en la calle o sea como movilero de una radio o un canal de TV.

Me parece que lo que tiene el concepto de "bajo fuego", o de una situación de conflicto, es la espectacularidad de contar un hecho que es poco frecuente que se cuente. Yo creo que en esos casos no hay demasiada diferencia con contar un hecho, menos espectacular, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ¿por qué debería ser distinto contar una guerra o lo que está pasando en una guerra, a lo que pasa en un conflicto

social o lo que pasa por ejemplo en un caso muy frecuente y que por lo general solemos ver cómo ahí se corren los límites de la calidad en función de determinados intereses o en función de la rapidez, como por ejemplo cubrir el velorio de una persona que acaban de matar en un robo? Esa cobertura en la que van los periodistas a preguntarle al padre o a la madre qué siente. Entonces, me parece que sea bajo fuego, sea en la redacción, sea en la calle o en el velorio, lo que tiene que haber es ética, lo que tiene que haber es sensibilidad, lo que tiene que haber es rigor periodístico, pasión y seriedad.

Cuando uno viaja a determinadas zonas de conflicto, a mí me ha tocado trabajar mucho en Colombia, en Haití o en Perú, he trabajado con colegas que después fueron tildados de guerrilleros o de voceros de la guerrilla, con lo que eso implica en un país como Colombia.

Pero insisto, me parece que cuando uno cubre situaciones de conflicto, lo que tiene que tener en claro es que uno está ahí para contar lo que pasa. Y uno no está ahí para contar lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa a los verdaderos protagonistas de esa situación de conflicto. Muchas veces lo que no se tiene en cuenta es que uno, como periodista, está ahí porque es parte de su trabajo, está ahí porque quiere y no porque sea parte del conflicto. Está ahí para contar lo que pasa. Lo que ocurre muchas veces, a partir de presiones de los medios o de la falta de límites que se impone el periodista, es que se produce un cambio de eje: es decir, el periodista como protagonista y no el periodista como quien cuenta lo que pasa en un lugar de conflicto determinado.

Me parece que lo que hay que tener en claro siempre es que, sea cual fuere el trabajo, bajo fuego, cómodamente en la redacción, si no tenemos límites éticos para hacer lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, el resultado es un fracaso.

Lo que habría que preguntarse como periodista es qué sentido tiene que le preguntemos a una madre que ha perdido a su hijo qué siente. ¿Qué le va a contestar un padre frente al cajón de su hijo asesinado? ¿Va a decir que se siente bien? Deberíamos preguntarnos cuál es el sentido que tiene para un lector leer una declaración que es de sentido común. ¿Aporta algo al caso, aporta algo a la cobertura de ese caso? No aporta nada, no aporta valor periodístico tener a una persona que diga “estoy destruida”. Creo que en definitiva en esos casos no hay que preguntar y hay que resistir a las presiones para que hagamos esa pregunta u otras similares. Y me parece que en una situación de conflicto, o bajo fuego, se puede pensar en lo mismo. ¿Por qué pasaría a ser importante cómo me siento yo como periodista?

El periodista está haciendo su trabajo. Y le pagan por eso. Entonces, poner al periodista como protagonista de una historia me parece que es equivocar el eje. El protagonista de la historia es lo que está pasando: una guerra civil, una guerra internacional, una situación de conflicto social, como pueden ser las sucesivas caídas de los gobiernos en Ecuador, que me ha tocado cubrir; lo que pasa en Colombia sistemáticamente. O en Haití, donde todo el mundo disparaba para todos lados y uno no sabía de dónde venían las balas. Pero insisto, no tengo por qué anteponer el cómo me siento al cómo se siente realmente el protagonista de la historia, que es una sociedad, un pueblo, un país, un Estado.

En síntesis, creo que la calidad no debe estar en tela de juicio, sean cuales fueran las circunstancias en las que uno debe trabajar. Y que, salvo excepciones muy contadas, nunca hay que anteponer nuestra historia a la historia que vamos a cubrir.

Comentarios y preguntas

Para Pablo Biffi: Quizás esa serie de mensajes que recibiste no sea de lectores finos de diarios, sino de algún grupo que se puso de acuerdo y dijo: "a este tipo que vino a hacer una entrevista a la guerrilla hay que darle palos, aprovechemos". Quizás no sea representativa esa muestra agresiva de mensajes que recibiste.

Pablo Biffi: Porque vos sabes que estaban bien diferenciados. Los de la cadena los diferencié claramente, porque estaban escritos todos iguales. Y con la firma cambiada. Y sé que venían de Buenos Aires, además. Pero no, eran de lectores colombianos y no importan los agresivos. Los muy respetuosos –el colombiano es muy respetuoso de por sí, es muy formal, es muy cortés– tenían una visión de lo que debía ser nuestro trabajo periodístico muy equivocada y yo creo que tiene que ver con lo que ha sido la historia más reciente del periodismo en Colombia, que es en parte de lo que ha hablado Carlos. Cómo muchas veces han barrido debajo de la alfombra, han ocultado cosas porque no responden a los intereses de los medios, porque los medios son parte de un interés más general, político y, bueno, lo podemos ver hoy con *El Tiempo* y la familia Santos.

Introduzco el tema de espectáculo que se paga con la propia vida. Hace cinco años unos periodistas free lance, que trabajaron para Antena 3 TV, estaban cubriendo el conflicto de Manila en 2002/2003 y desde la redacción en Madrid les dijeron: "Si no hay buenas imágenes el reportaje no sale". Ellos si el reportaje no salía debían pagarse todo el viaje. Se metieron en aguas pantanosas, recibieron dos tiros cada uno y bueno, hoy esa historia fue contada a través de su muerte. Me gustaría que comentaran ustedes si conocen algún caso más, qué advertencia para periodistas jóvenes, noveles, debería haber al respecto.

Jorge Elías: Debo confesar algo: violé todas las normas éticas para ir al Caguán. Todo aquello que me habían dicho que no debía hacer, terminé haciéndolo con el afán periodístico de ir al Caguán en un momento en el que no pasaba nada y, por lo tanto, no había otros periodistas. Esa era la zona de despeje concedida por el Gobierno de Andrés Patrana a las FARC, pero no había ningún acontecimiento que permitiera o ameritara mi presencia allí. Hice entonces lo que, en teoría, no debía hacer. Las FARC habían secuestrado al padre de una amiga mía, colombiana, mientras yo vivía en Washington. Esta amiga, desde Washington, enviaba a los militares desde botas hasta equipos de onda corta mientras la familia, en Bogotá, pagaba en cuotas el rescate. En cuotas porque cada vez exigían más dinero. Lograron liberarlo gracias a un mediador. Un par de años después me enviaron a Colombia. Me puse en contacto con el mediador. Mantuve un diálogo reservado con él. Su hijo trabajaba en el Senado. El hijo me facilitó sus contactos con las FARC y, por teléfono, recibí instrucciones y una especie de salvoconducto para ir a la zona de despeje. Esto significó llevar chocolate, whisky y cigarrillos para pasar los retenes de los militares, de los paramilitares, del ELN (la otra guerrilla) y de

las FARC. De nada vale el dinero donde no se puede comprar más que aguardiente y cerveza. En aquel momento había surgido el Movimiento Bolivariano de Liberación Nacional, ideado por Alfonso Cano, el intelectual de las FARC. Estuve un par de semanas en el Caguán. Conviví con las FARC. Había llegado, pero no sabía cómo regresar. Tuve miedo, desde luego. De noche pateaban las puertas y cortaban la luz. ¿Cómo se previene una situación de ese tipo? Si uno no está dispuesto a vivirla, no se debe sentir obligado. Nadie puede obligarte a exponer tu vida. Y si lo hacés, que no sea solo. Después de un tiempo, como sucede tras cubrir guerras y conflictos armados en otros idiomas, uno puede preguntarse a sí mismo: “¿Quién te quita lo bailado?” Pero el momento, mientras uno baila, tiene mucho de aquello que suele robarte el sueño: la incertidumbre.

De las audiencias públicas, de los paramilitares, ¿hay algunas directrices o unas líneas de ética dentro de la redacción de El Colombiano, de cómo cubrir estas audiencias, y darle voz a las víctimas? Y a los colegas argentinos: ¿Han planteado que lineamientos hay para cumplir las audiencias a los ex represores, donde las víctimas están presentes y merecen todo el respeto?

Carlos Giraldo: Creo que, más que tomar partido por las víctimas abiertamente, se trata de entender más integral y ampliamente el relato de la guerra y del conflicto en el país. Se plantean muchas preguntas. Hay muchos medios que han querido ponerse del lado de las víctimas y construir su relato y su discurso informativo desde ahí. Es valioso en el sentido de que esas víctimas no habían aparecido habitualmente y no eran protagonistas dentro de las posibilidades de comprender lo que estaba ocurriendo en el país.

Pero quisiera pensar que eso simplemente es una actitud de apertura y de aceptación democrática de voces diferentes, sobre todo de la gente de las zonas más rurales, la que ha estado por fuera de la narrativa de los medios masivos, que no se han acercado a esos lugares a contar la guerra en Colombia. Pero me parece nocivo y peligroso cuando uno como periodista cree que sólo desde ahí se puede contar mejor el conflicto. Por su apasionamiento, su rencor y su dolor, las víctimas también pueden ser fuente de desinformación y de visiones sesgadas de la realidad.

En tal sentido, atendería las recomendaciones generales que nos dicen que hay que escuchar todas las voces posibles, y documentar y allegar el mayor esfuerzo testimonial y documental, para tratar de entender una confrontación tan compleja, porque a veces las víctimas o cometen imprecisiones o tienen una lectura apasionada por fuerza del sufrimiento que les ha causado el conflicto, o porque incurren en entregarnos versiones interesadas y filtradas por algunos de los actores del conflicto armado en ciertas regiones. Entonces, nos ha enseñado la práctica, y nos ha enseñado a equivocarnos a veces, de ponernos tan ciega y férreamente del lado de las víctimas, que eso tampoco resulta siendo bueno para construir un relato verdaderamente ajustado a la verdad y lo más cercano a la realidad del conflicto armado colombiano.